



Proceso	Verbal
Demandante	Alejandra Maya Madrid y otros
Demandados	Seguros del Estado S.A.
Radicado	No. 05001-31-03-002-2017-00440-01
Procedencia	Juzgado Segundo Civil del Circuito de Medellín
Instancia	Segunda
Ponente	Luís Enrique Gil Marín
Asunto	Sentencia No.029
Decisión	Confirma
Tema	Responsabilidad civil contractual
Subtemas	Responsabilidad civil contractual. Prescripción contrato de seguro. Jurisprudencia. Interrupción de la prescripción. Jurisprudencia.

**TRIBUNAL SUPERIOR**

**SALA SEGUNDA DE DECISIÓN CIVIL**

Medellín (Ant.) doce de octubre de dos mil veintiuno

**I. OBJETO**

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en contra de la sentencia anticipada proferida por el **JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE MEDELLÍN**, en este proceso verbal instaurado por **MARÍA ISABEL VÉLEZ ESTRADA, MARÍA VIRGELINA LÓPEZ SOTO, MARYEN CECILIA GUTIÉRREZ CALLE,**

**ALEJANDRA MAYA MADRID y CESAR LUIS RODRÍGUEZ DUMAR**, en contra de **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

## **II. ANTECEDENTES**

**Pretensiones:** Los demandantes solicitan se declare la ocurrencia del siniestro por incumplimiento de las obligaciones laborales de la sociedad J&E TEMPORALES NUEVO MILENIO S.A.; y la responsabilidad contractual de Seguros del Estado S.A., por afectación de la póliza No. 2143101000463; se reconozca y ordene el pago al tiempo de vigencia de la póliza de las siguientes sumas de dinero para cada uno de los demandantes Cesar Luis Rodríguez Dumar: \$58.063,36 prestaciones sociales y \$14.241.144,00 indemnización moratoria; Maryen Cecilia Gutiérrez Calle: \$9.036,00 prestaciones sociales y \$15.786.680,00 indemnización moratoria; María Isabel Vélez Estrada: \$7.637,91 prestaciones sociales y \$13.346.666,00 indemnización moratoria; María Virgelina López Soto: \$18.384,20 prestaciones sociales y \$32.117.030,00 indemnización moratoria y, Alejandra Maya Madrid: \$93.862,50 prestaciones sociales y \$17.800.000,00 indemnización moratoria; más los intereses moratorios a la tasa máxima legal desde el 07 de abril de 2013. Por último, solicitan se condene a la demandada al pago de las costas.

**Elementos fácticos:** En sentencia proferida por el Juzgado Once Laboral del Circuito, modificada por el Tribunal Superior de Medellín, en el proceso laboral radicado bajo el No. 2008-00495, condenó a la sociedad J&E TEMPORALES NUEVO MILENIO S.A., al reconocimiento y pago de las siguientes

sumas a los demandantes: Cesar Luis Rodríguez Dumar \$19.134.048,00; Maryen Cecilia Gutiérrez Calle \$15.842.328,00; María Isabel Vélez Estrada \$31.555.344,00; María Virgelina López Soto \$24.476.016,00 y, Alejandra Maya Madrid \$28.980.000,00; la sociedad J&E TEMPORALES NUEVO MILENIO S.A., contrató y pagó la póliza de cumplimiento de obligaciones laborales No. 2143101000463, con Seguros del Estado S.A.; el 07 de marzo de 2013 presentaron a la sociedad demandada la reclamación del siniestro ocurrido tras la reseñada sentencia, quien respondió en forma negativa; como una vez ocurrió el siniestro transcurrió el término de un mes como lo ordena el art. 1080 del C. de Comercio, a partir del 08 de noviembre de 2013, se vienen generando intereses moratorios; atendiendo la vigencia de la póliza, surge el derecho al pago parcial de la sentencia por la aseguradora; los últimos salarios diarios devengados por los pretensores, para efectos de liquidar la indemnización moratoria eran los siguientes: Cesar Luis Rodríguez Dumar \$39.779,00; Maryen Cecilia Gutiérrez Calle \$43.370,00; María Isabel Vélez Estrada \$36.666,00; María Virgelina López Soto \$88.233,60 y, Alejandra Maya Madrid \$50.000,00; el 22 de mayo de 2017, se presentó ante el Centro de Conciliación "CONCILIADORES", la solicitud de conciliación extrajudicial, cuya audiencia tuvo lugar el 08 de agosto de 2017 y la constancia de no acuerdo fue expedida el 15 de los mismos mes y año; interrumpiendo el término prescriptivo.

***Integración del contradictorio:*** Admitida la demanda y notificada al apoderado judicial de la compañía de seguros demandada (folios 107 cuaderno principal), la replicó, se opuso

a las pretensiones y propuso los siguientes medios de defensa:

***i) Prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro; ii) inexistencia de presupuestos legales para la afectación del contrato de seguros contenido en la póliza No. 21-43-101000463; iii) ausencia de cobertura material de la póliza No. 21-43-101000463; iv) no cobertura de indemnización moratoria; v) inexistencia de intereses moratorios de que trata el artículo 1080 del Código de Comercio; vi) límite al valor asegurado y, vii) la genérica.***

***Sentencia anticipada:*** Se profirió el 12 de agosto de 2019, con la siguiente resolución:

***"PRIMERO: SE DECLARA probada la "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN" derivada del contrato de seguro -Póliza de cumplimiento-, a favor de SEGUROS DEL ESTADO S.A., de conformidad con los argumentos expuestos en las consideraciones de la presente providencia.***

***"SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, SE DESESTIMAN LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA.***

***"TERCERO: SE CONDENA en costas a la parte demandante.***

***"CUARTO: SE FIJA como agencias en derecho a favor de la parte demandada la suma de \$2.800.000".***

Al examinar las cláusulas acordadas en el contrato de seguro de cumplimiento, celebrado entre la compañía de seguros

demandada y la empresa de servicios temporales a la que los demandantes estaban afiliados como trabajadores en misión, indica la sentencia de primer grado que debe verificar si la materialización del riesgo se presentó cuando se emitió la resolución administrativa que declaró la iliquidez de la sociedad tomadora, porque el riesgo asegurado es la iliquidez que pueda llegar a presentar la empresa y, en virtud de ello el pago de los salarios y prestaciones sociales pendientes de los trabajadores se traslada a la aseguradora cuando la compañía esta en incapacidad económica de hacerlo, pues la función de la póliza es garantizar el cumplimiento del contrato que ampara, como se desprende de la condición 3º denominada siniestros, donde aparece consignado: *"se entiende causado el siniestro cuando quede debidamente ejecutoriada la Resolución Administrativa que declare el incumplimiento que ampara esta póliza"*; al efecto, la Resolución No. 000718, proferida el 30 de marzo de 2009, por el Ministerio de Protección Social dispuso: *"ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la iliquidez de la Empresa Servicios Temporales J Y E TEMPORALES NUEVO MILENIO SOCIEDAD ANÓNIMA con domicilio principal en la Calle 39A N° 28-22 de Bogotá Cundinamarca, con NIT 830.063.667-3 por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído.*

*"ARTÍCULO SEGUNDO: CANCELAR la autorización de funcionamiento de la empresa de servicios temporales denominada J Y E TEMPORALES NUEVO MILENIO SOCIEDAD ANÓNIMA con NIT 830.063.667-3, con domicilio principal en la Calle 39A N° 28-22 de Bogotá autorizada mediante Resolución N° 2941 del 20 de diciembre de 1999, por lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.*

*“ARTÍCULO TERCERO: Informar a las partes interesadas que contra la presente Resolución proceden los recursos de reposición ante este Despacho y en subsidio el de Apelación ante el Director Territorial de Cundinamarca, interpuesto debidamente sustentado dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la desfijación del edicto según el caso, de acuerdo a lo establecido en los artículos 50 y 51 del C.C.A.*

*“ARTÍCULO CUARTO: En firme el acto administrativo, denunciar el siniestro ante la compañía de SEGUROS DEL ESTADO SA, para proceder a hacer efectiva la póliza de garantía N° 21-43-101000463”.*

La precitada resolución refuerza lo dicho; esto es, que el siniestro se presentó cuando fue declarada la iliquidez de la empresa, naciendo desde ese momento el derecho de los interesados para hacer efectiva la garantía de pago de los salarios y prestaciones sociales; no siendo posible desde ninguna óptica como lo hace el extremo activo, que la materialización del riesgo tuvo lugar cuando quedó ejecutoriada la sentencia que resolvió el litigio laboral contra la empresa de servicios temporales, porque es clara la determinación del riesgo en el clausulado del contrato y se desconocerían los términos bajo los cuales se obligó la aseguradora; bien podrían los empleados de la empresa, como beneficiarios de la póliza haber interrumpido el término prescriptivo, presentado la conciliación extrajudicial en la debida oportunidad generando de la misma manera que el

trámite judicial – que sería más demorado – no superara el término legal otorgado para proceder con la afectación del seguro; máxime, que era de su conocimiento la difícil situación económica por la que pasaba su empleador; por estas razones, se puede colegir que ha operado la prescripción ordinaria para los pretensores porque eran conocedores de la situación de la empresa y de la resolución que declaró su iliquidez, situación que les permitía hacer efectiva la garantía para que la aseguradora les cancelara los salarios y prestaciones sociales; además, y si en gracia de discusión se aplicara la prescripción extraordinaria, que corre para todas las personas, dicho término estaría más que vencido, porque la reclamación extrajudicial tuvo lugar en el año 2017 y la póliza venció desde el año 2014, partiendo de la fecha en que se materializó el riesgo (folios 185 a 190 cuaderno principal).

**Apelación:** Lo interpuso la parte demandante, quien señaló como reparos: La naturaleza de las obligaciones que se pretenden a cargo de la aseguradora demandada, son indemnizatorias y por el incumplimiento de obligaciones laborales a cargo de la empleadora de los demandantes, las cuales no surgen a la vida jurídica de pleno derecho; sino, que tienen que ser declaradas por un juez laboral al unísono con la declaratoria de responsabilidad del empleador mediante sentencia ejecutoriada; en el presente caso, la decisión quedó en firme el 22 de mayo de 2012, lo que hace imposible cualquier reclamación con anterioridad; fecha que se debe tomar como punto de partida para calcular el término de prescripción extraordinaria de cinco (5) años; el estado de iliquidez es la causa del siniestro, pero no el siniestro en sí,

porque a pesar del estado de insolvencia, la sociedad Temporales Nuevo Milenio S.A., tenía la obligación legal de dar aplicación a la prelación de créditos prevista en el art. 2495 del C. Civil; teniendo en cuenta que el término de prescripción empezó a correr desde el 22 de mayo de 2012, el mismo se interrumpió el 07 de marzo de 2013, cuando se radicó en la compañía demandada la reclamación de la póliza No. 2143101000463, quien oportunamente dio respuesta; empezando a correr nuevamente el término de cinco (5) años de la prescripción extraordinaria el 07 de marzo de 2013, cuando se presentó la reclamación conforme la parte final del art. 94 del C. General del Proceso, corriendo hasta el 07 de marzo de 2018 y, la demanda se presentó en el año 2017, es decir, antes del vencimiento de dicho término; si la resolución que declaró la iliquidez de la empresa Temporales Nuevo Milenio S.A., como lo señaló la a quo tiene efectos jurídicos sobre los derechos de los pretensores, en el expediente no existe prueba de su notificación personal o por edicto; amén, que ello implicaría que estaban obligados a reclamar a la compañía de seguros, sin contar con la decisión judicial que verificaba el incumplimiento de las obligaciones, la generación del siniestro y de los perjuicios, lo que solo tuvo lugar el día 22 de mayo de 2012, cuando quedó en firme la sentencia que así lo declaró; por estas razones solicita la revocatoria de la sentencia de primer grado y, en su lugar, se ordene continuar con el trámite del proceso (folios 191 y 192 cuaderno principal).

En segunda instancia, dentro del término del traslado para sustentar el recurso de apelación, el extremo activo, en suma, volvió sobre los argumentos esgrimidos en primera instancia al



señalar los reparos concretos objeto de inconformidad y que vienen de sintetizarse.

Por su parte, la sociedad demandada luego de realizar un recuento de los antecedentes, de la solicitud y de la sentencia anticipada y sobre el recurso de apelación; indicó que el desacuerdo de la parte actora frente a la sentencia anticipada es errado, porque el riesgo asegurado no corresponde al incumplimiento por parte de la sociedad Temporales Nuevo Milenio S.A., con las acreencias laborales a favor de los demandantes; toda vez, que la póliza fue expedida en virtud de lo previsto en el Decreto 4369 de 2006, que establece como riesgo indemnizable la declaración de iliquidez de la empresa de servicios temporales; lo que resulta consonante con el concepto No. 08SE2018120300000006487, del Ministerio del Trabajo; la póliza 21-43-101000463 se expidió con base en el reseñado decreto y en ella se pactó como objeto contractual: *"EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DE LOS TRABAJADORES EN MISIÓN EN CASO DE ILIQUIDEZ DE LA EMPRESA J&E TEMPORALES NUEVO MILENIO S.A. Y QUE HAYAN SIDO VINCULADOS DENTRO DE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA"*; lo que resulta coherente con las condiciones generales de la póliza; en especial, con la condición tercera *"Siniestros"*.

Igualmente, afirma la recurrente que como punto de partida para que comience a correr el término prescriptivo, se debe tomar la ejecutoria de la sentencia laboral porque sus representados no tenían por qué conocer del contrato de seguro; dejando de lado, lo señalado por la Sala Laboral del

Tribunal Superior de Medellín, al desatar la segunda instancia en el proceso laboral radicado bajo el No. 2008-00495, donde indicó: *“De la Resolución 00718 de 2009 del Ministerio de la Protección Social, allegada al proceso por la apoderada de la parte demandante con el efecto de hacer efectiva la póliza suscrita por dicha empresa a favor de sus trabajadores para el pago de sus salarios y prestaciones dejadas de pagar...”*; de donde se sigue, que desde antes de la fecha en que fue proferida dicha decisión, 27 de abril de 2012, la parte actora ya conocía de la reseñada resolución, incluso, se puede afirmar que dicho documento fue aportado en primera instancia porque en el sistema de gestión no aparece que se hubiera allegado en el trámite de segunda instancia, es decir, que antes de que fuera proferida la decisión de primer grado, 30 de junio de 2010, el extremo activo ya conocía de la citada resolución; a más que no se puede dejar de lado lo previsto en el art. 9 del C. Civil, así como lo establecido en la Ley 50 de 1990 y en el Decreto 4369 de 2006.

Así mismo, el recurrente se equivoca al afirmar que la prescripción aplicable al presente caso es la extraordinaria, esto es, la de cinco (5) años, porque el interesado no puede escoger a su arbitrio cualquiera de las dos vías prescriptivas como lo ha señalado la jurisprudencia; resulta claro que la prescripción aplicable es la ordinaria, de dos (2) años, contados a partir de la de la declaratoria de iliquidez de la empresa J&E Temporales Nuevo Milenio S.A., esto es, el 30 de marzo de 2009; amén, que al contrario de lo afirmado por la recurrente el término prescriptivo no se interrumpió, como lo señaló el Tribunal Superior de Bogotá - Sala Civil, en decisión que

transcribe en lo pertinente; amén, que en el presente caso tal como se desprende de la fecha de declaratoria de iliquidez, de la reclamación extrajudicial, de la solicitud de conciliación previa, del acta de no acuerdo y de la radicación de la demanda, la prescripción derivada del contrato de seguro está configurada; incluso, en el evento que se considere que el siniestro se debe entender realizado en el momento en que quedó en firme la sentencia laboral, 22 de mayo de 2012, tanto la acción ordinaria como la extraordinaria se encuentran prescritas, porque el escrito del 07 de marzo de 2013, no tiene la virtualidad de interrumpir la prescripción. Por estas razones, solicita se confirme la decisión de primer grado.

### **III. CONSIDERACIONES**

***Problemas jurídicos:*** El recurso de apelación de cara a la sentencia de primer grado, plantea los siguientes problemas jurídicos que la Sala debe resolver: (i) ¿cuándo empezó a correr el término de prescripción previsto en el artículo 1081 del Código de Comercio? y (ii) ¿la excepción denominada “*prescripción de la acción*” está llamada a prosperar?

***Caso concreto:*** El extremo activo pretende se declare la ocurrencia del siniestro, porque la empresa J&E TEMPORALES NUEVO MILENIO S.A. incumplió con las obligaciones laborales y, en consecuencia, se declare la responsabilidad de la compañía de seguros por afectación de la póliza No. 2143101000463, y se le ordene al pago de los dineros reconocidos a los demandantes en el proceso ordinario laboral

que se adelantó ante el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, bajo el radicado No. 2008-00495.

Al efecto tenemos; la condena cuyo reconocimiento y pago se pretende a cargo de la compañía de seguros demandada, tuvo como origen la sentencia que reconoció el pago de las prestaciones sociales e indemnización moratoria a favor de cada uno de los pretensores, proferida por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín y confirmada por la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, puesto que los actores fungieron como trabajadores en misión para la empresa de servicios temporales J&E TEMPORALES NUEVO MILENIO S.A., sociedad que para su funcionamiento tenía la obligación de constituir una póliza de garantía, por mandato del art. 11 del Decreto 4369 de 2006, que dispone: *“Las Empresas de Servicios Temporales están obligadas a constituir una póliza de garantía con una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, a favor de los trabajadores en misión, para asegurar el pago de sus salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, en caso de iliquidez de la Empresa de Servicios Temporales, la cual deberá depositarse en el Ministerio de la Protección Social”*.

Para la efectividad de la garantía, el canon 18 del citado Decreto, dispone que: *“La póliza de garantía se hará efectiva a solicitud de los trabajadores en misión, cuando la Empresa de Servicios Temporales se encuentre en iliquidez la cual se presumirá, sin necesidad de estudios económicos, cuando ocurra uno o más de los siguientes eventos:*

*"1. Que el funcionario competente del Ministerio de la Protección Social compruebe que por razones de iliquidez, la Empresa ha incumplido en el pago de dos o más períodos consecutivos de salario, de acuerdo con lo establecido en el contrato de trabajo.*

*"2. Que exista mora en el pago de los aportes a la seguridad social por más de cuarenta y cinco (45) días, sin perjuicio de la cancelación de la autorización de funcionamiento de que trata el artículo 30 de la Ley 828 del 2003.*

*"3. Que durante más de tres (3) ocasiones en una anualidad, exista mora en el pago de aportes a la seguridad social.*

*"4. Que la Empresa de Servicios Temporales entre en el proceso de acuerdo de reestructuración de obligaciones.*

*"5. Que la Empresa de Servicios Temporales se declare en estado de iliquidez.*

*"Cuando un grupo de trabajadores presente queja formal por presunta iliquidez de la Empresa de Servicios Temporales, el funcionario competente solicitará a la Coordinación del Grupo de Relaciones Individuales y Colectivas de la Unidad Especial de Inspección, Vigilancia y Control de Trabajo del Ministerio de la Protección Social, que realice el correspondiente estudio económico y determine dentro de los treinta (30) días siguientes, si se encuentra o no en estado de iliquidez.*

*“Determinado el estado de iliquidez, sea por la ocurrencia de uno de los hechos descritos en el presente artículo o a través del estudio económico, el funcionario competente procederá por solicitud de los trabajadores en misión, a hacer efectiva la póliza de garantía, mediante acto administrativo que declara el siniestro y ordenará directamente a la compañía de seguros realizar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, con base en las liquidaciones que para el efecto elabore el Inspector de Trabajo del lugar donde se prestó el servicio”.*

Igualmente, la *“póliza de seguro de cumplimiento disposiciones legales”* No. 21-43-101000463, expedida el 04 de enero de 2008, donde figura como tomador/garantizado la sociedad J&E TEMPORALES NUEVO MILENIO SOCIEDAD ANÓNIMA EN LIQUIDACIÓN, y como asegurado/beneficiario los trabajadores en misión al servicio del afianzado, en la condición 3ª denominada siniestro, estipula: *“Se entiende causado el siniestro cuando quede debidamente ejecutoriada la Resolución Administrativa que declare el incumplimiento que ampara esta póliza, por causas imputables a la persona obligada al cumplimiento de la respectiva Disposición Legal, cuando tal Resolución haya sido notificada oportuna y debidamente a SEGURESTADO”.*

Además, el Ministerio de Protección Social, Dirección Territorial de Cundinamarca, mediante Resolución No. 00718 del 20 de marzo de 2009, ordenó:

*“ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la iliquidez de la Empresa Servicios Temporales J Y E TEMPORALES NUEVO MILENIO SOCIEDAD ANÓNIMA con domicilio principal en la Calle 39A N° 28-22 de Bogotá Cundinamarca, con NIT 830.063.667-3 por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído.*

*“ARTÍCULO SEGUNDO: CANCELAR la autorización de funcionamiento de la empresa de servicios temporales denominada J Y E TEMPORALES NUEVO MILENIO SOCIEDAD ANÓNIMA con NIT 830.063.667-3, con domicilio principal en la Calle 39A N° 28-22 de Bogotá autorizada mediante Resolución N° 2941 del 20 de diciembre de 1999, por lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.*

*“ARTÍCULO TERCERO: Informar a las partes interesadas que contra la presente Resolución proceden los recursos de reposición ante este Despacho y en subsidio el de Apelación ante el Director Territorial de Cundinamarca, interpuesto debidamente sustentado dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la desfijación del edicto según el caso, de acuerdo a lo establecido en los artículos 50 y 51 del C.C.A.*

*“ARTÍCULO CUARTO: En firme el acto administrativo, denunciar el siniestro ante la compañía de SEGUROS DEL ESTADO S.A, para proceder a hacer efectiva la póliza de garantía N° 21-43-101000463”.*

Conforme con los mandatos legales citados, lo acordado en la póliza de seguros y el art. 1072 de la Codificación Mercantil, el

siniestro que dio origen a la reclamación, lo constituye la realización del riesgo asegurado; evento que tuvo lugar con la declaratoria de iliquidez de la empresa J&E TEMPORALES NUEVO MILENIO S.A., como lo dispuso el Ministerio de Protección Social, Dirección Territorial de Cundinamarca, mediante Resolución No. 00718 del 20 de marzo de 2009.

En este caso, el siniestro amparado por la compañía de seguros demandada, tuvo ocurrencia con la ejecutoria de la Resolución No. 00718, del 30 de marzo de 2009, mediante la cual se declaró la iliquidez de la sociedad J&E TEMPORALES NUEVO MILENIO S.A., como acertadamente lo coligió la señora juez a quo y no fue a partir de la ejecutoria de la sentencia que reconoció y ordenó el pago de las prestaciones sociales e indemnizaciones moratorias a favor de los demandantes, como lo afirma el recurrente.

Ahora, con independencia del momento en que los pretensores como beneficiarios, tuvieron conocimiento del siniestro que dio origen a la reclamación; esto es, la iliquidez de la empresa de servicios temporales, en el presente caso estamos en presencia de la prescripción extraordinaria, que es de cinco (5) años y, corre contra toda clase de personas y se computa desde el momento en que nace el respectivo derecho, como lo establece el art. 1081 del C. de Comercio; en el seguro de responsabilidad, por mandato del art. 1131 Ib., se entiende ocurrido el siniestro en el momento en que acaezca el hecho externo imputable al asegurado, fecha a partir de la cual correrá la prescripción respecto de la víctima; de donde se sigue, que tratándose de la prescripción extraordinaria, toda



vez que los demandantes como beneficiarios del seguro están ejerciendo la acción directa contra la compañía de seguros; el término prescriptivo es de cinco (5) años, contados a partir de la ocurrencia del siniestro; esto es, la declaratoria de iliquidez de la empresa de servicios temporales, que tuvo lugar en el año 2009 conforme a la Resolución No. 00718 expedida por el Ministerio de la Protección Social, Dirección Territorial de Cundinamarca, lo que significa que el término de prescripción venció desde el año 2014; luego, para la fecha en que se solicitó la audiencia previa de conciliación, 22 de mayo de 2017 (folios 28 y 29 cuaderno principal), la prescripción ya había operado y, por lo tanto, dicha petición no tuvo la virtualidad de suspender el término prescriptivo, como lo dispone el artículo 21 de la Ley 640 de 2001; cuya consumación resulta más palmaria para la fecha de presentación de la demanda, el 15 de agosto de 2017 (folio 11 cuaderno principal).

Frente a este tópico, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 29 de octubre de 2007, expediente 1998-04690, señaló: *"3.3. Y es dentro de ese contexto, que adquiere singular importancia la referencia expresa que el comentado artículo 1131 hace en punto al momento en que "acaezca el hecho externo imputable al asegurado, para establecer la ocurrencia del siniestro y, por esta vía, para determinar que es a partir de ese instante, a manera de venero, que correrá la prescripción respecto de la víctima, habida cuenta que cotejada dicha mención con el régimen general del artículo 1081, resulta más propio entender que ella alude a la prescripción extraordinaria en él consagrada, a la vez que desarrollada, ya que habiendo fijado como punto*

*de partida para la configuración de la prescripción de la acción directa de la víctima, la ocurrencia misma del hecho generador de la responsabilidad del asegurado –siniestro–, es claro que optó por un criterio netamente objetivo, predicable sólo, dentro del sistema dual de la norma en comentario, como ya se señaló, a la indicada prescripción extraordinaria, ya que la ordinaria, como también en precedencia se indicó, es de estirpe subjetiva, en la medida que se hace depender del conocimiento real o presunto del suceso generador de la acción, elemento este al que no aludió la primera de las normas aquí mencionadas, ora directa, ora indirectamente, aspecto que, por su relevancia, debe ser tomado muy en cuenta”.*

En cuanto a que el término de prescripción de cinco (5) años se interrumpió por un término igual, conforme lo previsto en el inciso final del art. 94 del C. General del Proceso, con la presentación a la compañía de seguros del escrito de reclamación del siniestro, el 07 de marzo de 2013 (folios 70 a 72 cuaderno principal); se pone de presente, que como lo confesó la apoderada judicial de la parte demandante en el hecho quinto de la demanda (art. 193 del C. General del Proceso), esa reclamación no tiene la virtualidad de interrumpir el término prescriptivo porque se remitió a la aseguradora para los efectos previstos en el art. 1080 del C. Mercantil; esto es, que pasado un mes de la reclamación sin que se realice el pago, se generan intereses moratorios a partir del 08 de noviembre de 2013; es más, el documento como referencia indica “*Reclamación de siniestro*”; sin que pueda darse a este instrumento un alcance o trascendencia diferente a la pretendida por los demandantes, ni adecuarlo a determinada

situación cuando su sentido y fines aparecen claros y categóricos; nótese además, que el requerimiento escrito a que alude el inciso final del citado artículo 94, se debe realizar directamente por el acreedor y, en el presente caso, la aludida comunicación fue suscrita y remitida por el doctor Hugo Zuluaga Jaramillo, como apoderado especial de los demandantes en el proceso laboral tramitado ante el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, en contra de la sociedad J&E TEMPORALES NUEVO MILENIO S.A., radicado No. 2008-01495, mandato que no lo habilitaba para presentar dicho requerimiento, porque estaba revestido de un poder especial que solo lo autorizaba para actuar en nombre de sus representados al interior del reseñado proceso. Al respecto, la Sala Primera de Decisión del Tribunal Superior de Bogotá, en sentencia del 28 de septiembre de 2017, radicado No. 11001310301920160068701, M.P. Dr. Marco Antonio Álvarez Gómez, señaló:

*“De conformidad con los artículos 2539, inciso 3º, del Código Civil y 94, inciso final, del C.G.P., la prescripción se puede interrumpir, en forma civil, de dos maneras: (i) por la demanda judicial y (ii) por el requerimiento escrito realizado al deudor directamente por el acreedor, modalidad de la que sólo puede hacerse uso por una vez.*

*“En el caso de la reclamación a la que se refiere el artículo 1080 del Código de Comercio, modificado por el artículo 111 de la Ley 510 de 1999, la Sala considera que, por su naturaleza y características, no constituye requerimiento con fines interruptores del plazo prescriptivo, por las siguientes razones:*

*“a. La primera, porque si bien es cierto que la obligación del asegurador despunta o tiene su origen en la ocurrencia del siniestro, esto es, en la realización del riesgo asegurado (C. Co. art. 1054) –lo que se afirma sin desconocer que es a propósito de la celebración del contrato de seguro que el asegurador contrae la obligación condicional (arts. 1037 y 1045, ib.)-, no lo es menos que el pago de la respectiva indemnización está supeditado a que el asegurado o beneficiario formule una reclamación mediante la cual demuestre que el siniestro tuvo lugar, lo mismo que la cuantía de la pérdida, según el caso, de conformidad con lo previsto en los artículos 1077 y 1080 del estatuto mercantil.*

*“Por consiguiente, si en el caso especial del contrato de seguro, la reclamación es una arquetípica carga –de orden sustancial- en cabeza del asegurado o beneficiario, que no solo es presupuesto de la acción ejecutiva (C. Co., art. 1053), sino también de la mora del asegurador, como lo puntualizó la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 30 de septiembre de 2014 (exp. 7142), no puede ella constituir, al mismo tiempo, ejercicio del derecho del acreedor a interrumpir la prescripción en forma civil. Al fin y al cabo, el propósito fundamental de ese escrito es demostrar, probar o acreditar, de lo que depende, se insiste, el pago de la indemnización.*

*“Es cierto que la obligación del asegurador germinó con la materialización del riesgo; pero si el pago de la prestación asegurada exige, como presupuesto sustantivo, la demostración del siniestro y la cuantía de la pérdida, es claro*

*que el cumplimiento de esta carga simplemente traduce la observación de dicha conducta.*

*“b. La segunda, porque al interpretar una norma jurídica es necesario tener en cuenta, en todos los casos, el efecto útil de la misma.*

*“Quiere ello decir que entre varias interpretaciones plausibles, el juez debe preferir la que le brinde mayor eficacia a la disposición interpretada, por sobre la que se lo restrinja, máxime si en ella se reconoce un determinado derecho.*

*“Desde esta perspectiva, considerar que la reclamación hace las veces de requerimiento con fines interruptores de la prescripción, da lugar a que la facultad prevista en el inciso final del artículo 94 del C.G.P., resulte, en la práctica, anodina, porque en un solo acto quedarían agrupadas la demostración del derecho (de suyo esencial) y la interrupción del término para ejercerlo. Expresado con otras palabras, como esta modalidad de interrupción sólo puede darse por una vez, no es posible aceptar una postura en virtud de la cual la carga de presentar una reclamación absorbe el derecho del acreedor a exigirle a su deudor, con fines interruptores de prescripción, que honre una deuda cuyas variables –siniestro y cuantía de pérdida- previamente debe probar”.*

Consecuente con lo anterior, la excepción de prescripción propuesta por la parte demandada está llamada a prosperar, como así lo coligió la a quo.

**Conclusión:** Consecuente con lo expuesto, se confirmará la sentencia de primer grado.

Se condenará a la parte demandante a pagar las costas de segunda instancia a favor de la demandada. Como agencias en derecho causadas en segunda instancia se fijará por el Magistrado Ponente la suma de UN MILLÓN OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS (\$1.817.052), que equivale a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes (Acuerdo PSAA16-10554, del 5 de agosto de 2016, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura), que se liquidarán conjuntamente con las de primer grado.

#### **IV. RESOLUCIÓN:**

A mérito de lo expuesto, la **SALA SEGUNDA DE DECISIÓN CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

#### **F A L L A:**

**1.** Por lo dicho se confirmará la sentencia de fecha y procedencia indicada en la parte motiva.

**2.** Se condena a la parte demandante a pagar las costas de segunda instancia a favor de la demandada. Como agencias en derecho causadas en segunda instancia se fija por el Magistrado Ponente la suma de UN MILLÓN OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS (\$1.817.052) que

equivale a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes (Acuerdo PSAA16-10554, del 5 de agosto de 2016, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura), que se liquidarán conjuntamente con las de primer grado.

**3.** Se ordena devolver el expediente al juzgado de origen.

**CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

**Los Magistrados**



**LUIS ENRIQUE GIL MARÍN**



**MARTHA CECILIA LEMA VILLADA**



**RICARDO LEÓN CARVAJAL MARTÍNEZ**